

La reforma de las filas

SEGURIDAD PÚBLICA EN UNA CÔTE D'IVOIRE DIVIDIDA

Desde 2002, Côte d'Ivoire se encuentra dividida en dos: una zona controlada por los rebeldes en el Norte y otra zona dirigida por el gobierno en el Sur. Por esta razón se halla sometida a un sistema de gobierno muy particular, compuesto de dos aparatos de seguridad, dos Tesorerías y dos administraciones diferentes. En ese sentido, el país ofrece una oportunidad poco frecuente para estudiar no solamente la compleja reforma posconflicto del sector de la seguridad, sino que también un sistema doble de prestación de seguridad: el de los rebeldes por un lado, y el de la administración de Estado oficial por el otro.

Las publicaciones que tratan sobre las fuerzas armadas marfileñas son escasas y no existe ningún libro de referencia acerca del Ejército marfileño o la rebelión. Así, este capítulo se basa en gran parte en el trabajo de campo realizado por el autor en 2010 y en una encuesta nacional de hogares que se llevó a cabo ese mismo año.

Un país, dos sectores de seguridad

El presente capítulo estudia la evolución que ha experimentado la relación entre los dirigentes militares y políticos desde la independencia, concluyendo que la crisis no sólo ha afectado a las prestaciones de servicios de seguridad en la zona controlada por los rebeldes, sino que también a la porción del país bajo el mando del gobierno. En gran parte, ambas fuerzas armadas se ven enfrentadas a las mismas deficiencias: las violaciones de los derechos humanos son moneda corriente, los niveles de corrupción son elevados, existe una falta de control democrático, la rendición de cuentas es muy limitada y los recursos son insuficientes. A estos efectos, se podría describir a las fuerzas de seguridad casi como 'depredadoras' y, en consecuencia, una total desconfianza en ellas se percibe a través de todo el territorio nacional.

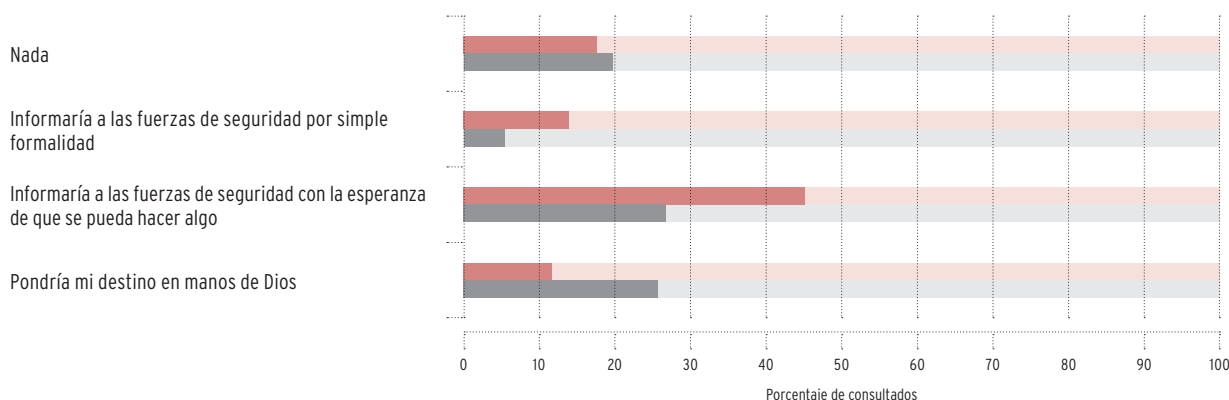
Contrariamente a la percepción generalizada, el desempeño de los proveedores de seguridad del Estado no es muy superior al de los rebeldes.

En general, la población de Côte d'Ivoire no se siente segura. Tanto la inseguridad percibida como la real se han generalizado, y si bien la sensación de inseguridad es mayor en la zona en poder de los rebeldes, la investigación ha demostrado que los civiles que viven en la zona controlada por el gobierno tienen iguales posibilidades de ser víctimas de la violencia armada.

Figura 7.1 **Respuestas a la victimización**

Respuestas (porcentaje) a la pregunta: "¿Qué haría si fuese víctima de un delito violento?" en la zona gubernamental (n°=1.782) y en la zona CNO (n°=658)

■ Zona de gobierno ■ Zona CNO



Cuadro 7.4 Delitos denunciados a la Policía criminal del distrito de Abiyán entre 2004 y 2009

Delitos	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total
Número total de delitos	5.045	5.479	2.889	3.472	3.267	2.379	22.531
Homicidios voluntarios	46	55	48	71	57	46	323
Robos–todas las categorías	4.409	5.294	2.454	2.731	2.740	2.067	19.695
Atracos a mano armada o violentos	3.539	4.653	1.813	1.900	2.067	1.490	15.462
Robos armados	322	343	255	215	190	286	1.611
Ataques a vehículos privados	1.576	2.312	865	803	1.011	732	7.299
Ataques a taxis	1.519	1.869	642	744	638	328	5.740

La dinámica de la inseguridad en una Côte d'Ivoire dividida

En 2010, Côte d'Ivoire se encontraba sometida a los mismos tipos de inseguridad que se observan comúnmente en aquellos países en situación de posconflicto que aún no han concluido su proceso de transición hacia la paz: violencia económica y delictiva, violencia sexual, desplazamientos y conflictos posbélicos, violencia política y violencia relacionada con la represión de los delitos. La tipología de la inseguridad de la zona dominada por los rebeldes no difiere sustancialmente de la que se observa en la zona controlada por el gobierno.

Llenar el vacío de seguridad: la intervención de los proveedores de seguridad no estatales

Las deficiencias de las fuerzas de seguridad sumadas a la inseguridad existente a lo largo del país han promovido el surgimiento de una amplia gama de mecanismos de adaptación en ambas zonas del país. Entre los proveedores de seguridad no estatal se incluyen la autodefensa comunitaria, los grupos de vigilancia, los cazadores tradicionales o *dozos*, las milicias y las empresas de seguridad privada. Desde el comienzo de la crisis, el sector de la seguridad privada se ha desarrollado con rapidez y sin ningún tipo de regulación. La posesión de armas se halla además muy difundida, y los resultados de la encuesta en hogares muestra que, contrariamente a los demás países de la región, cerca de la mitad de la población marfileña considera las armas de fuego principalmente como un medio de protección.

Los mecanismos de seguridad no estatales crean nuevas formas de inseguridad.

La reforma del sector de la seguridad: más allá de la reorganización de las filas

El Acuerdo político de Uagadugú (APU) establece una serie de medidas –entre las que figuran iniciativas de posconflicto convencionales– con el propósito de poner fin al conflicto y reunificar el país. Sin embargo, tres años después de la aprobación del APU, se han conseguido avances limitados en cuanto a la reformas relacionadas con el sector de la seguridad. Aunque existe una necesidad indiscutible de llevar a cabo tales reformas, los esfuerzos se han orientado principalmente a la reunificación del aparato de seguridad, en vez de abordar la falta de control democrático, los objetivos estratégicos, el profesionalismo o las carencias logísticas de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, las medidas de seguridad de acción inmediata que han emprendido las partes interesadas a nivel nacional e internacional, tales como el desarme y la desmovilización de los combatientes, han fracasado. Los ejercicios de desarme han sido relativamente infructíferos, y las estructuras jerárquicas de las milicias y de las Forces Nouvelles siguen estando presentes. Por último, este capítulo muestra que no todos los marfileños resultan beneficiados de la reunificación del país y del establecimiento del 'Nuevo Ejército', y que todavía queda un gran número de temas por resolver.

El conflicto postelectoral de 2010 ha implicado el surgimiento de retos adicionales para la reforma del sector de la seguridad. Sin duda la violenta represión de las manifestaciones de civiles ha intensificado la desconfianza de la población hacia las fuerzas de seguridad, pero tal vez más preocupante aún sea el hecho de que la confrontación política ha exacerbado la politización de las fuerzas armadas, eliminando cualquier posibilidad de supervisión democrática del Ejército. En cierta forma, el proceso de redefinición de las relaciones político-militares en Côte d'Ivoire aún tiene camino que recorrer. ■